



Complejo minero de ArcelorMittal en Fermont, Quebec, 21-3-12 (Geraldine Woessner/AFP/Dachary)

Lejos de la imagen apacible que Canadá construye de sí misma, en Toronto, una de las principales ciudades del país, se concentran los más turbios negocios de la minería mundial. Mientras que el gobierno brinda seguridad jurídica y diplomática para resguardar a las empresas, el mercado especulativo aporta las herramientas financieras para su desarrollo.

“Prosperidad canadiense”, decadencia mundial

Toronto, corazón del imperio minero

por Alain Deneault y William Sacher*

En general, dentro de la industria minera, los capitales de riesgo vienen de Canadá”, lanza, con tono de certeza, el ingeniero belga René Nollevaux, administrador de una mina de cobre en la provincia congoleña de Katanga (1). De hecho, el 75% de las compañías mineras del mundo elige ese país para registrarse y el 60% de las que emiten acciones en Bolsa se inscribe en el Toronto Stock Exchange (TSX), donde, entre 2007 y 2011, se destinaron 220.000 millones de dólares canadienses al financiamiento mediante acciones en el sector minero —más de un tercio del total mundial—, lo cual ubica a Toronto muy por delante de su competidor directo, el London Stock Exchange (LSE). En 2011, el 90% de las acciones emitidas por el sector minero en el mundo fueron administradas por el TSX (2).

Esta proeza, que el gobierno federal presenta como un “motor de la prosperidad canadiense” (3), perjudica la imagen complaciente que el país se esfuerza por dar de sí mismo desde hace décadas: la de una aldea apacible que trabaja por el bien de la humanidad. En todo el mundo, las comisiones parlamentarias, cortes de justicia, paneles de especialistas

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), observadores independientes y aguerridos periodistas se desviven por denunciar los abusos, cuando no los crímenes, cometidos o apoyados por las compañías mineras instaladas en Canadá. Corrupción, evasión fiscal, saqueo institucionalizado, contaminación masiva, ataques a la salud pública, expropiaciones violentas, muerte de manifestantes, complicidad en la violación y asesinato de opositores a los proyectos mineros, pleitos estratégicos, criminalización de la protesta política, tráfico de armas, etc.: la lista es interminable.

Canadá recibe a la industria minera con los brazos abiertos. Y lo que es mejor: amolda su regulación y régimen impositivo de modo de favorecer su financiamiento y protegerla en los planos judicial y diplomático. Es así como australianos, israelíes, suecos, pero también belgas, estadounidenses, etc., terminan registrando allí sus empresas de exploración o explotación. No solamente para aprovechar las riquezas naturales del país, sino también para explotar las que adquirieron en Ecuador, Chile, Zambia, Burkina Faso, Indonesia o Rumanía. Cerca de la mitad de los proyectos mineros que cotizan en el TSX se encuentran

fuera de Canadá y muchas empresas inscriptas en Toronto no poseen ninguna concesión en el país.

Pequeño tamaño, enorme poder

Lo que atrae tanto a las empresas mineras es sobre todo la facilidad con la que una empresa puede cotizar en Bolsa y poner en valor yacimientos potenciales. Una muy amplia mayoría de las mil seiscientas sociedades mineras de Toronto son *juniors*, es decir, empresas que se dedican exclusivamente a la exploración e identificación de nuevos yacimientos. A menudo de pequeño tamaño, no poseen los recursos financieros, técnicos, humanos y políticos necesarios para explotar minas industriales. Por lo tanto, sacan sus ganancias de la especulación bursátil en torno a sus yacimientos potenciales.

En los países del Sur, las *juniors* se beneficiaron con las reformas impulsadas por el Banco Mundial en las décadas de 1980 y 1990, que implementaron el sistema del libre servicio minero (o *free mining*), que garantiza a las empresas el acceso irrestricto a los subsuelos. Cuando, después de una ardua labor de prospección o, más frecuentemente, gracias a la compra de información a agentes locales, una *junior* descubre un yacimiento

rentable, casi siempre termina vendiéndoselo a una *major*, una empresa de explotación, y cediéndole un proyecto “listo para desarrollar”, luego de una jugosa operación bursátil. Esta práctica ha sido incorporada a nivel mundial, al punto de que empresas estatales chinas, al igual que las *majors* occidentales, actualmente compran *juniors* torontesas en América Latina y África.

Desde que a mediados del siglo XIX comenzó la actividad en torno a títulos mineros canadienses, Toronto ha sido escenario de numerosos fraudes y escándalos vinculados con empresas *juniors*. En la década de 1960, algunos rumores infundados sobre un descubrimiento de cobre, plata y zinc provocaron una corrida para comprar títulos de la empresa Windfall, que puso a la Bolsa patas para arriba. En la década de 1990, Bre-X, una empresa de exploración de Toronto, espolvoreó con oro sus muestras de rocas para simular que provenían de un yacimiento de gran calidad... Los responsables de estas estafas nunca fueron condenados por la justicia canadiense.

La economía-casino

Así, Toronto es para estas empresas un verdadero templo del capital de riesgo (léase de la economía-casino). La exploración minera es una actividad especulativa por definición: nunca se sabe exactamente lo que esconde el subsuelo hasta que no se cava una mina. Por lo general, los especialistas del sector consideran que las chances de éxito de un proyecto de exploración son de una entre quinientas o mil. Un éxito que depende de la geología del terreno, de su accesibilidad, pero también de las fluctuaciones de las cotizaciones mundiales, de los avances tecnológicos, e incluso del clima político local. Comprar partes de una *junior* equivale a apostar a un número de ruleta.

Hace poco los franceses lo aprendieron a sus propias expensas. La empresa pública Areva compró en 2007 la torontesa UraMin... para descubrir que los yacimientos prometidos por la *junior* eran mucho más difíciles de explotar de lo previsto y que en su mayor parte había sido sobrevaluada en un 20%. Todo ello en un contexto en el que la cotización de uranio estaba en baja. Es difícil saber exactamente cuánto le habrá costado este error de cálculo al contribuyente francés. Lo que sí se sabe es que la adquisición de UraMin por 1.800 millones de euros obligó a Areva a realizar en 2010 una depreciación de activos de 426 millones de euros.

Si es fácil especular con los títulos mineros en el TSX, es porque el mercado bursátil torontés siempre permitió que las empresas cultivaran la ambigüedad respecto de la viabilidad real de los yacimientos potenciales. Por ejemplo: se puede hacer malabares entre las nociones de “reservas” y “recursos”, aunque la primera sea un cálculo circunstanciado y preciso del potencial de un yacimiento y la segunda un cálculo burdo, esencialmente basado en extrapolaciones de datos geológicos.

La normativa, particularmente ambigua, favorece la conquista de nuevos espacios de explotación minera, en un contexto donde el aumento de poder de los países emergentes hizo explotar la demanda de recursos minerales (por ejemplo, en los últimos veinte años China multiplicó su consumo por diecisiete). Sucede que las *juniors* invierten más en campañas de marketing para captar eventuales inversores, que en la búsqueda de nuevos yacimientos: un procedimiento que abre la puerta a las ya mencionadas estafas.

Otra ventaja para las empresas mineras: las autoridades canadienses, tanto

